



► El auge de las prestaciones coincide, paradójicamente, con máximos históricos de ocupación y dibuja una realidad más compleja que la de un país que simplemente «vive de las pagas»

La España subsidiada: récord de empleo y expansión de las ayudas

Rosa Carvajal. MADRID

España nunca había tenido tanta gente trabajando. Pero tampoco había tenido tantos hogares protegidos por el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Las dos cifras conviven en una economía que se acerca a los 50 millones de habitantes y que ha llevado el empleo hasta máximos históricos. En el segundo trimestre de 2026 había 22,78 millones de ocupados, según la Encuesta de Población Activa. Al mismo tiempo, en julio, 879.225 hogares recibían el IMV y 2.682.646 personas vivían en ellos. Dicho de otra manera, alrededor del 5,4% de la población española —aproximadamente uno de cada 19 residentes— vive en un hogar cubierto por esta prestación.

La factura también ha adquirido otra dimensión. La nómina del IMV correspondiente a julio ascendió a 473,3 millones de euros. Mantener durante doce meses una cuantía mensual semejante supondría un ritmo de gasto próximo a los 5.700 millones anuales, aunque esta extrapolación no

debe confundirse con el gasto presupuestario finalmente ejecutado durante el ejercicio.

El crecimiento resulta todavía más llamativo cuando se observa la serie histórica.

A finales de 2022 el IMV llegaba a 549.670 hogares y 1,54 millones de personas. En diciembre de 2024 eran ya 673.729 hogares y algo más de dos millones de beneficiarios. Un año después se alcanzaban prácticamente los 800.000 hogares y 2,44 millones de personas. Siete meses más tarde, la cobertura roza los 880.000 hogares y se aproxima a los 2,7 millones de integrantes.

En apenas tres años y medio, el número de hogares protegidos ha aumentado alrededor de un 60% y el de personas que viven en ellos, cerca de un 74%.

Solo durante el último año, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las prestaciones activas crecieron un 16,9% y el número de beneficiarios un 16,7%.

Las cifras parecen alimentar una pregunta que aparece recurrentemente en el debate público: ¿se está convirtiendo España en un país subsidiado?

La respuesta es bastante menos



Alrededor del 5,4% de la población española vive en un hogar cubierto por el IMV

El 51% de los perceptores del IMV recibió en 2024 al menos otra prestación pública

El subsidio por desempleo es la prestación que con mayor frecuencia se complementa

sencilla de lo que sugieren algunos titulares. No son 2,7 millones de adultos cobrando una paga.

El primer matiz es esencial.

Los 2,68 millones contabilizados por la Seguridad Social no son 2,68 millones de adultos que cobren directamente el IMV. Son todas las personas que viven dentro de los hogares protegidos por la prestación.

De ellas, 1.089.965 son niños y adolescentes, prácticamente el 41% del total.

Además, el diseño de la prestación permite complementar determinados ingresos laborales. La imagen clásica de un Estado que sustituye completamente el salario desaparecido mediante una ayuda empieza así a convivir con otra realidad: la del Estado que complementa rentas que considera insuficientes.

Y es precisamente aquí donde la aparente contradicción entre récord de ocupación y récord de

beneficiarios comienza a tener sentido.

España no está registrando una caída del empleo acompañada de una explosión equivalente de las ayudas sociales. Está aumentando simultáneamente el número de personas que trabajan y el número de hogares que necesitan algún tipo de complemento público de renta.

Ya no es solamente cuántos ciudadanos trabajan y cuántos reciben prestaciones, sino cuántos trabajadores forman parte de hogares que, aun teniendo ingresos laborales, no alcanzan determinados umbrales.

Una España muy desigual

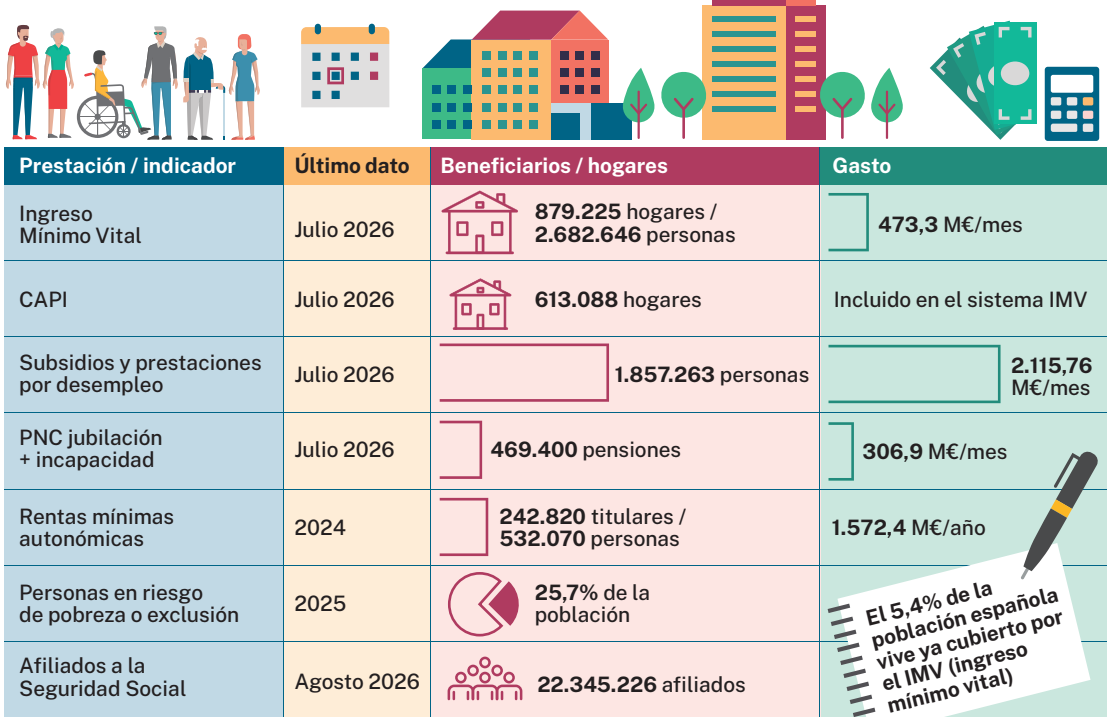
Andalucía concentra por sí sola más de 800.000 personas en hogares cubiertos por la prestación. En términos relativos, la cobertura ronda los 96 beneficiarios por cada 1.000 habitantes.

En Extremadura se aproxima a



CRISTINA BEJARANO

LA ESPAÑA SUBSIDIADA



Fuentes: M° de Inclusión (IMV y CAPI, julio 2026), M° de Derechos Sociales, INE, SEPE e IMSERSO

Infografía LA RAZÓN

94 y en Murcia a 89. En el extremo contrario aparecen Baleares, con aproximadamente 24 beneficiarios por cada 1.000 habitantes; Madrid, con unos 31; y País Vasco, con alrededor de 32.

La probabilidad de vivir en un hogar con IMV es, por tanto, aproximadamente cuatro veces superior en Andalucía que en Baleares. Y esta distribución guarda una estrecha relación con otro mapa: el de la pobreza.

La Encuesta de Condiciones de Vida del INE situó en 2025 las mayores tasas de riesgo de pobreza o exclusión social en Andalucía, con un 34,7%; Castilla-La Mancha, con un 34%; y Murcia, con un 32,5%.

País Vasco, Baleares y Navarra se encontraban, por el contrario, entre las comunidades con tasas más reducidas. La España de las prestaciones es, antes que nada, una España profundamente desigual desde el punto de vista territorial.

Pero probablemente el dato que mejor permite comprender el funcionamiento actual del sistema no sea el número total de beneficiarios. Es el solapamiento entre prestaciones.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en su última evaluación del IMV, constató que el 51% de los hogares perceptores recibió durante 2024 al menos otra prestación pública y un 16% combinó el IMV con dos o más ayudas adicionales.

El subsidio por desempleo es la prestación que con mayor frecuencia se complementa con el ingreso mínimo.

Esto significa que para una parte considerable de sus beneficiarios el IMV no funciona como una ayuda aislada, sino como una capa más dentro de un entramado de protección formado por distintas administraciones y diferentes programas. El fenómeno se observa con especial claridad en las rentas

mínimas de las comunidades autónomas.

En 2020 estas prestaciones autonómicas alcanzaban a 795.861 personas y suponían un gasto próximo a los 1.970 millones de euros. En 2024 el número de beneficiarios había descendido hasta 532.070 personas y el gasto hasta unos 1.572 millones. Mientras el IMV estatal se expandía, las antiguas rentas autonómicas se contraían.

No se trata de dos movimientos independientes. Los datos recopilados por el Ministerio de Derechos Sociales muestran un elevado solapamiento entre ambos sistemas: en las comunidades que facilitaron información comparable, alrededor del 61% de los titulares de rentas mínimas percibía también el IMV.

Una parte importante de las rentas autonómicas extinguidas ha terminado, además, transitando hacia la prestación estatal.

Las pensiones no contributivas

A esta red se añaden las pensiones destinadas a quienes no han cotizado lo suficiente para acceder a una pensión contributiva.

En julio de 2026 había 469.400 pensiones no contributivas en España. De ellas, 304.854 correspondían a jubilación y 164.546 a incapacidad. La nómina mensual se situaba en torno a los 307 millones de euros. El importe medio rondaba los 629 euros mensuales en las pensiones de jubilación y los 700 euros en las de incapacidad.

Son prestaciones de naturaleza distinta al IMV y a la protección por desempleo, pero forman par-

te también de la red pública destinada a garantizar unos ingresos mínimos cuando las cotizaciones o los recursos propios no resultan suficientes.

El gasto en parados

La misma precaución debe aplicarse a las prestaciones por desempleo. En julio había 1,86 millones de beneficiarios de prestaciones por desempleo y el gasto mensual alcanzó los 2.115,76 millones de euros. La tasa de cobertura se situó en el 86,75%, en niveles históricamente muy elevados. Entre enero y julio, la factura acumulada rondó los 14.700 millones de euros, un 3,8% más que en el mismo periodo del año anterior.

Por otro lado, los registros de la Agencia Tributaria muestran que en 2024 4,21 millones de personas percibieron alguna prestación por desempleo a lo largo del ejercicio. De ellas, 3,23 millones —el 76,7%— percibieron también salarios durante ese mismo año. Eso no significa que cobrasen salario y prestación simultáneamente. En

muchos casos trabajaron durante una parte del ejercicio y estuvieron desempleadas durante otra; en otros pudieron combinar situaciones compatibles con la normativa. El dato vuelve a mostrar hasta qué punto la frontera entre trabajador y beneficiario de una prestación es menos nítida de lo que parece.

Cinco millones de coberturas

Si se reúnen los tres grandes sistemas anteriores aparece una cifra llamativa.

En julio de 2026 había: 2.682.646 personas viviendo en hogares cubiertos por el IMV; 1.857.263 beneficiarios de prestaciones por desempleo; y 469.400 pensiones no contributivas. La suma bruta supera los cinco millones: 5.009.309.

Es una cifra que permite visualizar la enorme dimensión que ha alcanzado la red pública de protección de rentas, aunque no puede interpretarse como cinco millones de personas distintas que viven exclusivamente de una ayuda pública. Pero tampoco convierte el dato en irrelevante: muestra hasta qué punto millones de hogares y trabajadores entran, en algún momento, dentro de una red pública de sostenimiento o complemento de rentas.

Existe, además, un dato especialmente relevante para analizar hasta qué punto estas prestaciones consiguen convertirse en un puente hacia una mayor autonomía económica. Según AIReF, el 46% de los hogares que entra en el IMV continúa recibéndolo 60 meses después.

Continúa en la página siguiente



Viene de la página anterior

Cinco años. Es una cifra que plantea una cuestión inevitable: hasta qué punto una prestación diseñada como última red de seguridad acaba convirtiéndose para una parte de sus perceptores en un componente estructural de los ingresos familiares. AIReF ha advertido de la necesidad de mejorar los incentivos al empleo y reforzar la coherencia del IMV con el conjunto de prestaciones sociales.

Pero mientras una parte de los hogares permanece durante años dentro del sistema, otra parte considerable de los potenciales beneficiarios ni siquiera accede a él.

La AIReF estima que el denominado non-take-up del IMV ronda actualmente el 52%. Es decir, más de la mitad de los hogares que potencialmente tendrían derecho a la prestación no llega a solicitarla. El sistema presenta así simultáneamente dos problemas aparentemente opuestos: hogares que acumulan diferentes capas de protección durante largos periodos y hogares vulnerables que no llegan a recibir las prestaciones a las que tendrían derecho.

De evitar la pobreza a complementar la renta

Otro programa permite observar hacia dónde está evolucionando la protección social.

El Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), integrado en el sistema del IMV pero con umbrales propios, alcanzaba en julio de 2026 a 613.088 hogares. Su objetivo no se limita a las familias sin ingresos. Puede extenderse a hogares con rentas superiores a las requeridas para cobrar el IMV completo, siempre que cumplan los límites de renta y patrimonio establecidos. El cambio conceptual no es menor. Durante décadas, buena parte de la protección asistencial se diseñó pensando fundamental-

mente en el ciudadano que había perdido sus ingresos o que carecía de ellos. Una parte de las nuevas prestaciones busca, en cambio, completar rentas existentes.

El Estado no sustituye necesariamente al salario. Lo suplementa. Y ahí surge posiblemente una de las grandes cuestiones económicas de los próximos años: si estas transferencias actúan como trampolín hacia mejores ingresos o si terminan convirtiéndose en un complemento permanente de salarios que el mercado no eleva suficientemente.

El crecimiento de las prestaciones tampoco ha eliminado el problema que pretende combatir. En 2025, el 25,7% de la población española estaba en riesgo de pobreza o exclusión social. La tasa de pobreza monetaria alcanzaba el 19,5% y un 8,1% de la población sufría carencia material y social severa. El 8,5% declaraba llegar a

52%
la mitad de los hogares
que potencialmente
tendría derecho al
IMV no lo solicita

25,7%
de la población española
estaba en riesgo de
pobreza o exclusión
social en 2025

final de mes con mucha dificultad y alrededor de un tercio de la población no podía permitirse determinados gastos relevantes.

El contraste resulta difícil de ignorar. España tiene más empleo que nunca. Tiene más hogares protegidos por el IMV que nunca. Y, pese a ambas cosas, uno de cada cuatro ciudadanos continúa dentro del indicador europeo de riesgo de pobreza o exclusión.

Quizá el principal interrogante no sea, por tanto, si España gasta demasiado en ayudas, sino por qué necesita ampliar su red de protección para corregir situaciones que el crecimiento del empleo no está consiguiendo resolver por sí solo.

España tampoco es una excepción europea

La comparación internacional introduce otro matiz importante. España no aparece como el país

europeo con un Estado del bienestar desproporcionadamente grande. Las prestaciones de protección social representaban en 2024 el 27,3% del PIB de la Unión Europea. España se situaba por debajo de esa media, mientras Finlandia, Francia y Austria superaban el 30%. Además, gran parte del gasto social corresponde a pensiones, sanidad y otras prestaciones que difícilmente pueden identificarse con la idea coloquial de una «paga». España sí destaca más en desempleo, consecuencia también de una tasa de paro estructural históricamente superior a la de la mayoría de las economías europeas.

La España subsidiada no es necesariamente un país de personas que han dejado de trabajar porque el Estado las mantiene. Estambién —y cada vez más— una economía en la que el sector público interviene para complementar ingresos, proteger rentas, incentivar determinadas actividades y sostener situaciones económicas que el mercado por sí solo no resuelve. Y esa realidad conduce a una pregunta bastante más incómoda que la discusión sobre las llamadas «paguitas»: ¿qué está fallando cuando una economía con casi 23 millones de ocupados necesita ampliar año tras año la red destinada a completar o sostener los ingresos de una parte importante de sus ciudadanos?

La respuesta determinará si el crecimiento de estas prestaciones representa el éxito de un Estado del bienestar capaz de proteger a quienes lo necesitan o el síntoma de una economía que está aprendiendo a convivir con la pobreza y los bajos ingresos en lugar de conseguir que sus ciudadanos salgan de ellos.

La frontera tradicional entre quien trabaja y quien recibe ayuda empieza a desdibujarse. Quizá sea ahí donde se encuentre la verdadera transformación.



España registra una tasa de paro del 9,87% con 2,5 millones de desempleados

EP